

DEPRESION ECONOMICA

Por doquier se oyen voces lamentando el estado de la economía española. Los empresarios denuncian la quiebra virtual de sus empresas, el alto coste del crédito, el peso de la Seguridad Social, la caída de la productividad, la indisciplina y el absentismo laborales. Los sindicalistas buscan a ciegas la salida de una situación en la que sus efectivos se reducen, los parados aumentan y el salario arrancado a la patronal queda minado por la inflación. Las familias se rebelan bajo la creciente presión fiscal y lamentan la deficiente calidad de los servicios sociales.

En esta situación cada vez más negra de insolvencia, inflación, paro y estancamiento, todos los españoles se vuelven hacia el Gobierno y le piden soluciones con urgencia. Las acusaciones suben de tono con cada día que pasa: se decía que el Gobierno primero estaba indeciso, luego inactivo, ahora se le tilda de incapaz. Políticamente tales situaciones son peligrosas porque fomentan las acciones precipitadas y los remedios milagreros.

El triunfo del señor Suárez al obtener un acuerdo con los vascos sobre el Estatuto de Euzkadi puede, paradójicamente, convertirse en un precedente peligroso para la solución de nuestros problemas económicos. Puede el presidente del Consejo pensar que la solución se encuentra en otra negociación al estilo de la que culminó en el Pacto de la Moncloa, incluso si el precio del acuerdo es esta vez un Gobierno de coalición con el PSOE.

¿Qué política económica podría emerger de tal acuerdo, qué medidas aplicaría un Gobierno de coalición? La parte positiva sería, desde el punto de vista de los empresarios, que quizá los sindicatos consintiesen en una moratoria de las alzas salariales y lucharan sólo pro forma contra la autorización del despido o de la rotación de plantillas. Con mucha suerte, podría conseguirse además que no quedara totalmente abandonada la lucha contra la inflación y el Banco de España pudiera continuar la suave contención monetaria.

Las desventajas contrapesarían con creces tales posibles logros. En primer lugar, un Gobierno de coalición supondría un fraude a los electores españoles que dieron su voto a UCD y a una concepción de la sociedad basada en la libertad individual, la libre competencia, y el respeto a la propiedad privada.

En segundo lugar, no hay razón para suponer que la presencia de socialistas en el Poder facilitase las tareas de flexibilizar el mercado de trabajo, de reducir el gasto público y de liberalizar la economía que el Gobierno UCD no acomete con suficiente decisión. La filosofía socialista armoniza mal con estas políticas económicamente ortodoxas y utilizadas en la actualidad por la mayor parte de los países occidentales para salir de la crisis.

En tercer lugar, es probable que se volviera a instaurar una planificación a la López Rodó. El PSOE y el PCE serían favorables a tal elixir. Incluso el señor Fernández Ordóñez, en una conferencia reciente en Barcelona, aludió a la posibilidad o la necesidad de planificar la economía española para salir de la crisis. Las palabras que empleó indican una visión trasechada de la planificación macroeconómica: dijo que planificación y economía de mercado son compatibles. En efecto lo son, porque una economía empresarial y abierta es capaz de sobrevivir a toda clase de entablillamientos y enyesamientos, y mal que bien, seguir produciendo prosperidad. La cuestión debe expresarse de

otra forma: si un Gobierno de coalición pretendiera planificar la economía española podría garantizarse que la economía iría mal cuando el plan funcionase bien, y la economía iría bien cuando el plan fuese mal. Una cosa es realizar proyecciones de demanda y capacidad productiva como hace el plan energético; otra, planear una economía moderna y abierta al comercio internacional. Pero, señores, ¿quién planifica en el mundo occidental? ¿En qué economía de mercado ha tenido éxito la experiencia planificadora? Ciertamente no en las social-democracias sueca, alemana o austriaca.

El camino para salir de la crisis es otro y el Gobierno UCD es capaz de andarlo sólo si quiere. Esa es la promesa que hizo a sus electores. Los compromisos electorales incumplidos fomentan el escepticismo ciudadano, que es caldo de cultivo de las soluciones autoritarias.

La economía española está en crisis por dos razones principales: la coyuntura mundial no es favorable y el marco institucional en el que se mueven los agentes económicos españoles es defectuoso.

La subida de los precios de las materias primas en el mercado mundial no ha podido sino desfavorecer a un país como España que importa la mayor parte de sus productos, básicos, incluso los agrícolas. Este factor no debe exagerarse, sin embargo. Los costes energéticos apenas suponen el 2 por 100 de los costes totales de nuestra actividad industrial. Las exportaciones españolas se han desarrollado espectacularmente desde julio de 1977 a pesar de un comercio mundial inerte y de la apreciación de la peseta. El mal es otro.

Estamos pagando ahora el precio de alegres experimentos y culpables parálisis. Durante dos años se ha calumniado, explotado, confundido al empresario y al ahorrador: el Gobierno, los sindicatos, la Administración pública, han pensado en todo menos en las condiciones para que la empresa funcione y el capital se invierta: el pueblo está sufriendo las consecuencias.

Las reformas prometidas se han realizado a medias o no se han iniciado siquiera. El contrato laboral sigue siendo tan rígido como en época de Franco. Los sindicatos compensan su falta de afiliados con la violencia de sus piquetes. La Seguridad Social sigue creciendo más deprisa que la renta nacional y apenas se empiezan a conocer sus cuentas. El fraude en el cobro de pensiones y del subsidio de paro es un hecho. El déficit público se ha disparado y se teme que alcance este año la suma de 450.000 millones de pesetas, suma traída de la financiación de las empresas privadas. Las pérdidas de las empresas públicas también aumentan, sin que ello sea óbice para que distorsionen el mercado laboral pagando salarios muy por encima de la productividad. La política monetaria está maniatada por el insaciable apetito de fondos del sector público. Los controles e intervenciones siguen en pie: control de cambios, limitación de las inversiones extranjeras, control de precios, congelación de alquileres, monopolios estatales, comercio de Estado.

Una crisis como la que sufre la economía española no es susceptible de mejora instantánea. En vez de planes económicos o programas gubernamentales llenos de buenas intenciones, es preciso que el Gobierno ponga en obra su promesa de convertir gradualmente la economía española en una economía de mercado. Ese es el programa económico que el país necesita y no la vuelta a la planificación.—PUBLIUS.